

“Entre amigos es mejor” Sobre el poder de veto que ejercen los grandes grupos económicos colombianos en la era Santos (2010-2017).

Franco Ignacio Galichini.

Cita:

Franco Ignacio Galichini (2017). *“Entre amigos es mejor” Sobre el poder de veto que ejercen los grandes grupos económicos colombianos en la era Santos (2010-2017)*. XII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-022/690>

Entre Amigos mejor

Las élites económicas en Colombia y sus vínculos con el gobierno de Juan Manuel Santos (2017)

Franco Galichini
(UBA-Facultad de Ciencias Sociales)

Eje temático: 12 (Sociología Histórica)

Mesa: 108 (Estado, grupos económicos y élites en América Latina)

Institución de pertenencia: Universidad de Buenos Aires

E-mail: francogalichini1993@gmail.com

Resumen:

El trabajo tiene como objetivos analizar los grupos económicos de poder y su relación con el gobierno de Juan Manuel Santos. Para ello, consideramos menester reconstruir una caracterización acerca del (los) perfil (es) de aquellos funcionarios designados por el presidente Santos para ocupar las más altas posiciones jerárquicas del gabinete ministerial. Desde una perspectiva híbrida -que contemplan cuestiones y atributos de la sociología histórica, la sociología económica y la sociología del poder y las elites- la ponencia se propone analizar las principales transformaciones ocurridas en el seno de las estructuras de poder colombianas y sus vínculos con las administraciones del Estado. La hipótesis de la ponencia es que las elites (empresariales, financieras, terratenientes, familiares, políticas) se presentan como el principal actor social capaz de hacerse con el control hegemónico del aparato estatal para brindarle una direccionalidad propia al conjunto del país.

Palabras clave: Elite, grupos económicos, poder.

El poder: una cuestión en constante metamorfosis

Esta ponencia girará en torno al análisis de 2 cuestiones referidas al ejercicio del poder en Colombia. Por un lado desarrollaremos una caracterización acerca del (los) perfil (es) de aquellos funcionarios designados por el presidente Santos para ocupar las más altas posiciones jerárquicas del gabinete ministerial, considerando atributos que contemplen variables sociodemográficas, educativas, de recomposición de trayectoria (públicas, privadas, mixtas) y de carrera política.

Por otro lado, buscaremos decodificar el subyacente esquema de alianzas establecido entre los funcionarios a cargo de la dirección ministerial del país y aquellos sectores de poder hegemónicos de la realidad social colombiana (burocracia, elites tradicionales familiares, capital concentrado extranjero, grandes grupos económicos, etc).

Para este estudio se ha hecho un relevamiento de casos cuya temporalidad contempla sólo el último año (2017) del segundo mandato presidencial de Juan Manuel Santos. ¿Qué posiciones o cargos consideramos? Las más altas: ministros, viceministros, secretarios y directores. Hemos incluidos a todas (aún en etapa de recolección de datos) las dependencias del Estado Nacional, pero para nuestro estudio se hará especial hincapié analítico en los 4 ministerios colombianos con mayor injerencia en materia económica; a saber: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; en adelante Ministerios De Incidencia Económica (MDIE).

Nos interesa profundizar en el estudio de los gabinetes ya que consideramos que se trata de dependencias estratégicas y nodales en la organización y el funcionamiento del poder gubernamental¹, al tiempo de que ofrecen (mediante la caracterización de sus rectores funcionarios) una identificación maniquea de los objetivos del gobierno y el contenido de sus políticas públicas. Determinar qué sectores sociales salen beneficiados o perjudicados por las medidas implementadas es, entre otras, una de nuestras más grandes preocupaciones. El compromiso por el sostenimiento de estudios que aborden los problemas de las elites se fundamenta en la sólida creencia de que sólo este tipo de análisis puede contribuir al desarrollo de premisas que posibiliten crear condiciones de concientización acerca del papel que juegan las elites en las dinámicas sociopolíticas, al tiempo de que convenimos

¹ Castellani, Ana y Canelo Paula, *Informe de Investigación Perfil sociológico de los miembros del gabinete inicial del presidente Mauricio Macri*, Nº1, Buenos Aires, Instituto de Altos Estudios Sociales; 2016.

convincientemente de que sólo estudios de este tipo pueden ayudar a comprender y mejorar la situación actual de las democracias latinoamericanas.

Realizamos esta investigación con diversas fuentes de información de acceso público. Entre ellas los sitios oficiales de los respectivos ministerios, Boletines oficiales, diarios y revistas de circulación nacional (El Tiempo, El espectador, Revista Semana, La silla Vacía), hojas de vida y fichas referenciales de los funcionarios publicados en diferentes instancias de divulgación (publicaciones académicas, presentaciones oficiales).

Introducción

Rescate de lo clásico para pensar lo moderno

Este trabajo se circunscribe bajo una revitalizada preocupación académica por el reactualizamiento de temas que fueron centrales durante los años sesenta y setenta y que, neoliberalismo mediante, perdieron peso en el campo de estudios de las ciencias sociales: las élites, los grupos económicos de poder y sus vínculos con el Estado.

Puede plantearse, de forma más o menos general, que los estudios y análisis acerca de las “élites” exhiben una problemática compleja. Su abordaje ha sido diverso, irregular y genérico. Una gran multiplicidad de corrientes teóricas- liberales, marxistas, republicanas- se han debatido histórica y políticamente la elaboración de un sistema conceptual que pueda dar cuenta de este actor social inmanente a la estructura de dominación de la sociedad capitalista. Sin embargo, como bien advierte José Francisco Cuello-Socarrás (2005), todas estas doctrinas comparten como premisa básica la existencia de cuerpos políticos especiales, ya sea en el seno mismo de las estructuras sociales o al interior mismo de los diferentes procesos políticos, que terminan erigiéndose en ciertas “minorías selectas” que poseen la facultad de otorgarle una direccionalidad propia al devenir heteróclito de los procesos sociales².

Autores clásicos como Mosca y Pareto, han dado el puntapié inicial para el despliegue de un extenso y polivalente escenario de formulaciones teóricas que han servido a la constitución de lineamientos básicos que son fundamentales de tenerse cuenta para el estudio de aquello que la sociología ha denominado históricamente como elites o clases dirigentes. Para Mosca (1987) el concepto guía es el de *clase política*³. Para el autor, en todas las sociedades conviven dos grandes clases de personas: los gobernantes y los gobernados. En sus estudios, el primer grupo se manifiesta bajo la forma de una minoría relativa que “desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él” (Mosca, Gaetano, 1987, pp 106). Por su parte, la mayoría gobernada es dirigida y regulada por la primera de un modo más o menos legal, o, como afirma Mosca de un modo más o menos arbitrario y violento⁴. La minoría gobernante es la llamada *clase política*. Sin embargo, advierte el autor, este sistema de dominación no se vertebra de forma mecánico-autonomicista. La minoría gobernante no puede sustraerse de justificar y fundamentar la posesión del ejercicio del poder. Procede entonces, con este fin, a establecer aquellos “valores

² Puello-Socarrás, José Francisco: “Elites, Elitismo y Neoelitismo”, *Revista Espacio Crítico* N^o2, México, 2005, p.2.

³ Mosca, Gaetano: *Elementos de ciencia política*. Primera edición. Turín, 1.987. Op. Cit., p. 106.

⁴Idem, p.106

supremos o principios fácticos”⁵ que generalmente son aceptados y fuertemente arraigados en una sociedad y en una época determinada. De esta manera, la *clase política* respalda el ejercicio del poder mediante una base moral, consensual y jurídica fuertemente estable. Desde allí reside, efectivamente, su fuente de legitimación.

En contrapartida, Pareto (1959) discute buena parte del arsenal teórico conceptual de Mosca. Para el autor, cualquier análisis social de las estructuras de dominación debe sobreponerse al supuesto tácito de un dualismo determinista que predique exclusivamente acerca de dos estratos fundamentales en una población: por un lado un estrato inferior o clase “no selecta” y, por otro lado, un estrato superior o “clase selecta” o élite. Recomplejizando aún más el análisis, Pareto propondrá una nueva dimensión de estudio al construir una taxonomía hacia el interior del concepto de *clase selecta*. En el seno mismo de la propia clase dirigente pueden sugerirse, todavía, dos fracciones: de una parte, aquellos que tienen una participación directa o indirecta en el gobierno, “la clase selecta gobernante”⁶ y, de otra parte, aquellos individuos que por el contrario, aun siendo parte de la élite, carecen de esta influencia; es decir, postulan una “clase selecta que no es gobernante”⁷. Este novedoso avance de la observación paretiana profundiza la investigación social a partir de la incorporación de una óptica que dé cuenta de las relaciones simples entre “gobernantes y gobernados” y, al mismo tiempo, permita darle cuerpo a una red de relaciones mucho más complejas que aquella introducida por los trabajos de Mosca. En otras palabras, en Pareto el concepto de élite interviene con una morfología política esencial.

El mantenimiento de la elite en el poder se asegura mediante una continua y perfecta circulación de las élites. Es decir, si se promueve una apertura adecuada de la clase selecta⁸ que habilite, por un lado, el acceso y ascenso de los elementos valiosos de las masas, y, por otro lado, admita el descenso de otros. En esta forma conceptual propuesta por Pareto, la élite no se convierte en una aristocracia vetusta o cristalizada impedida de innovar e incorporar miembros. Muy por el contrario, el énfasis está puesto en su continua capacidad de reajuste e inserción en las reglas que demanda el juego político y la coyuntura económica.

Otro autor que aporta a la discusión sobre la problemática de las elites es Wright Mills. Este autor inglés no recurre al concepto de clase gobernante⁹. Para él una elite es definida como una unidad homogénea y monolítica compuesta alrededor de una base política-económica y militar. Para Mills, de

⁵ Puello-Socarrás, José Francisco: “Elites, Elitismo y Neolitismo”, Revista Espacio Crítico N°2, México, 2005, p.8.

⁶ Pareto, Vilfredo. Tratado de sociología general. Alianza Editorial, México, 1959.

⁷ Ídem

⁸ Puello-Socarrás, José Francisco: “Elites, Elitismo y Neolitismo”, Revista Espacio Crítico N°2, México, 2005, p.16

⁹ Ídem, p.20

algún u otro modo, las elites son las protagonistas de la vida social, en la medida en que han concentrado los instrumentos del poder, riqueza y celebridad. Y, por ende, para comprenderlas es necesario identificar las personificaciones inmanentes a cada dominio de la vida social. En resumen, al identificar cada minoría principal -que para el autor cobran vida en las personificaciones de los presidentes de las empresas, los dirigentes políticos y los jefes militares¹⁰- se estará en vistas de reconocer a esa unidad homogénea sedimentada a partir del compartimiento de orígenes sociales comunes.

Hacia una caracterización sociohistórica de las elites tradicionales, aún vigentes, en Colombia

Desde el último cuarto de siglo XX, Colombia ha registrado un notorio cambio en su patrón de acumulación. Alejándose del objetivo desarrollista y modernizante, tan en boga durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1933-1974), las elites económicamente dominantes han pasado a un modelo de acumulación signado por el paradigma de la especulación financiera y la reprimarización de la economía, resguardando los viejos lastres del rentismo terrateniente, el estado patrimonialista y la alianza entre las distintas fracciones del capital y la renta, junto con su proyecto extranjerizante¹¹. Las sucesivas políticas desarrolladas desde 2002 (año que remarca el comienzo del gobierno de Uribe) hasta la actualidad, nos permiten observar que las acciones gubernamentales han estado histórica y linealmente enfocadas hacia la construcción de un escenario libre de competencia insertado en el mercado mundial, para lo cual se ha establecido un régimen de excepcionalidad permanente en materia económica¹². Para nuestro trabajo, la expansión y consolidación del neoliberalismo en Colombia, está directamente asociada con el comienzo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010) y su propuesta de un Estado Comunitario, soportada en la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática, la cual encuentra continuidad en el actual Programa de Gobierno de Juan Manuel Santos de Prosperidad Democrática (2010-2014, 2014-?).

¹⁰ Puello-Socarrás, José Francisco: “Elites, Elitismo y Neolitismo”, Revista Espacio Crítico N°2, México, 2005, p.22

¹¹ Caicedo, Daniel; y Anzola, Librado: “*La hegemonía de la oligarquía financiero-terratiente en Colombia*”, Revista Espacio Crítico N° 7, Julio-Diciembre, 2007, p.1.

¹² Giraldo, Jaramillo, Juan Esteban: “*La producción de vidas residuales*”, en Ponencia presentada en el II Coloquio Usos y Lecturas de Foucault para la Agencia de Prensa, Octubre, 2016. <http://www.ipc.org.co>.

Un trazado de dimensionalidad histórica nos muestra cómo las políticas neoliberales motorizadas, han sentado las bases para una nueva institucionalidad y un nuevo esquema jurídico tendiente a favorecer y estimular los procesos de acumulación capitalista en Colombia. Destaca el observador y analista social Juan Esteban Jaramillo Giraldo (2016) que partir de los años noventa- en especial desde el mandato de Pastrana (1998-2002) se dio forma a un largo camino que tendió al establecimiento de un régimen de “excepcionalidad permanente” en materia económica y a la producción de una nueva espacialidad para el capital, fundamentalmente asentada en la transnacionalización y la desestatización de la política y la economía, configurándose, de esta forma en Colombia, un verdadero *estado empresario*. Este proceso se dio en el marco de una transición de un modelo de acumulación capitalista basado en la industrialización y el desarrollismo dirigido por el Estado, hacia un modelo de acumulación flexible y de rasgos financieristas.

En suma, tal y como afirman Caicedo y Anzola (2010), la actual coyuntura colombiana representa el triunfo histórico de la oligarquía financiero-terrateniente. Esta realidad se explica por una economía que se ha tornado más monetaria y especulativa, en la cual las actividades financieras han superado el incremento de la economía productora de bienes y servicios. “El capital financiero se ha vuelto autorreferencial” (Caicedo y Anzola; 2010, pp, 2). El grado de concentración del poder financiero colombiano registra en la actualidad un desarrollo jamás conocido¹³. Hoy en día, el poder corporativo se ha sistematizado, y ha capturado una por una las variadas dimensiones de la expresión y el ejercicio del poder, dando lugar a una nueva arquitectura del poder realmente existente.

Algunos autores¹⁴ vinculan esta dinámica con el concepto de *Captura del Estado* y la definen en términos de la acción de individuos, grupos o corporaciones, en el sector público y privado, que buscan influir en la formulación de leyes, regulaciones, decretos y demás políticas gubernamentales, para su propio beneficio. La *Captura del Estado* requiere, por definición, una concentración de poder económico en unos determinados agentes o grupos con capacidad de intervenir y mediar por sus propios intereses. Se da una reconfiguración cooptada, patrimonialista del Estado, por parte de grupos poderosos en la estructura económica, política y social. Esta situación se logra mediante el ejercicio del

¹³ En este sentido un ejemplo claro del caso colombiano lo representa el Grupo Aval Valores S.A del empresario Juan Carlos Sarmiento Angulo. Grupo Aval se ha constituido en los últimos años como un holding que maneja todas las inversiones de sus entidades financieras y que hoy controla los bancos de Bogotá, Popular, AV Villas, de Occidente, Corficolombiana, Porvenir y Leasing de Occidente, así como varias filiales y agencias en Panamá, Miami, Nueva York, Nassau y Barbados. Hoy en día, dicho holding controla más del 30 por ciento de la banca nacional. En 2015 el Grupo Aval se estrenó en Wall Street, la plaza financiera por excelencia del planeta, al emitir acciones preferenciales por 1.265 millones de dólares. A la fecha el grupo financiero Aval es líder en Centroamérica con el 8,5 por ciento de los activos de la región. (Revista Semana, Mayo 16 de 2015)

¹⁴ Nótese el trabajo realizado por: Luis Jorge Gray Salamanca, Eduardo Salcedo, Isaac de León-Beltrán, Bernardo Guerrero; La Reconfiguración cooptada del Estado: Más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado, Edición Fundación AVINA, 2009.

poder orgánico de dichos grupos en amplias esferas de las relaciones sociales. Aunque pueda resultar ajena a la dinámica democrática, la cooptación en resulta funcional a la reproducción social de los grupos dominantes en tanto favorecen a la cohesión interna del grupo, al mantener el control de las elites, directivos y líderes. En este sentido, suele argumentarse que la cooptación minimiza la incertidumbre del bloque dominante al reducir la posible influencia externa.

Circunscripto dentro de los márgenes del modelo de valorización financiera vigente, en Colombia se asiste a un proceso de mutación orgánica dentro de las estructuras de dominación. Resalta el analista búlgaro Ladislau Dowbor: “En esta era de financiarización global, la plusvalía financiera¹⁵ se ha convertido en la forma dominante de apropiación de la renta y la riqueza. Este capitalismo disfuncional en términos económicos necesita cada vez más del Estado para compensar con poder político toda la legitimidad que pierde en la esfera económica”¹⁶. Aquello que en el pasado eran deformaciones fragmentarias, penetraciones puntuales a través de lobbies, de actos de corrupción y de «puertas giratorias» entre el sector público y el privado, pasó a cobrar un mayor volumen y se convirtió, por ósmosis, en poder político articulado dentro del cual el interés público es algo que aflora solo por momentos. El poder económico financiero, entendido de esta forma, conduce con una notable rapidez la deformación del sistema político colombiano, al tiempo de que contribuye a la conformación de un “perfil dirigencial” específico hacia el interior de las dependencias gubernamentales.

En el marco de esta discusión, nuestro trabajo facilita un marco de percepción evidente al reconstruir la trayectoria ocupacional de los funcionarios jerárquicos del gabinete presidencial. Los resultados (tentativos) elaborados, hasta el momento, nos hablan a las claras sobre el notorio poder de influencia que ejerce el poder financiero en el país. Dentro del subconjunto de ministerios que componen los MDIE, poco más de la mitad (55,55%) de los funcionarios seleccionados se ha desempeñado en el campo de la actividad financiera¹⁷. En contrapartida, en el resto de los gabinetes analizados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones exteriores) apenas un 18% se ha visto involucrado en este tipo de funciones. La notable concurrencia laboral en entidades vinculadas con el ejercicio de funciones financieras (bancos locales e internacionales, consultoras, holdings, juntas directivas de agencias de circulación de capitales, fondos financieros para el desarrollo), nos permite augurar acerca de la nodal influencia que adquiere tal

¹⁵ Con un sistema financiero globalizado, la apropiación de la plusvalía obedece a mecanismos centrados en la especulación con: deuda pública; impuestos que recaen sobre personas físicas y jurídicas; e incontables tasas sobre tarjetas de crédito, seguros y otros productos cada vez más complejos que drenan las economías mundiales.

¹⁶ Dowbor, Ladislau: “*El capitalismo cambió las reglas, la política cambió de lugar*”, en Revista Nueva Sociedad, Octubre, 2016.

¹⁷ Resulta esquemático el caso del Ministerio de Hacienda y crédito público de la Nación, en el cual el total de los funcionarios analizados (4) se han visto implicados en el ejercicio de trabajos vinculados con el mercado financiero.

maquinaria económica en el adiestramiento correspondiente del poder político. En el actual gabinete presidencial, las corporaciones del capital financiero han puesto en evidencia un desplazamiento general de las esferas de manifestación del poder. Dichas corporaciones operan a nivel nacional, transformando el escenario de correlación de fuerzas y cooptando buena parte de la estructura ministerial.

La hegemonía vigente de la oligarquía financista colombiana (que encuentra en buena parte de sus jefes ministeriales a las personificaciones más evidentes del capital) ha organizado un complejo plan de reestructuración institucional y económica, mediante “(...) el promulgamiento de reformas laborales y financieras, que han tendido a insertar decididamente al país en el aparato productivo del mercado internacional, la disminución del rol interventor del Estado en materia económica, el ampliamiento del área de influencia del sector privado sobre la esfera social y ambiental; y el gerenciamiento del capital extranjero.”¹⁸ Estos factores sumados explican la debilidad política crónica del Estado colombiano y su incapacidad de integrar a la población en un entramado institucional democrático.

Gina Paola Rodríguez (2014) y Juan Jaramillo Giraldo (2016) marcan un *continuo* entre las gubernaturas de Uribe y Santos, siendo más sus divergencias en términos de estilos de liderazgos políticos - la manera en que se aparecen públicamente; siendo el primero más verborrágico, irascible y extremista, a diferencia del segundo más moderado, prudente y de tono más conciliador- que en cuanto a contenidos ideológicos o programáticos. En suma, ambos representan la encarnación de un proyecto de país fundamentado en el concretamiento de tres grandes ejes: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social.

El primer eje ha significado toda la estrategia (militar y diplomática) desplegada en torno al aseguramiento del control territorial por parte de la fuerza pública, así como para someter y disciplinar a los actores armados ilegales del conflicto armado interno (principalmente las organizaciones armadas de las FARC y del ELN). Ésta estrategia no puede desvincularse de los otros dos ejes, en especial con el eje de confianza inversionista. La estrategia de seguridad democrática logró consolidar un escenario para la libre movilidad y la atracción de grandes capitales trasnacionales por las garantías de seguridad que se ofrecen para su asentamiento en el territorio colombiano, las cuales no han estado solamente asociadas al control de los actores armados ilegales, sino que también, bajo el eslogan de la lucha contra el terrorismo, se han reprimido y criminalizado a movimientos, organizaciones y luchas sociales,

¹⁸ Caicedo, Daniel; y Anzola, Librado: “La hegemonía de la oligarquía financiero-terrateniente en Colombia”, Revista Espacio Crítico N° 7, Julio-Diciembre, 2007, p.10.

librando a los empresarios de la “molestia” que representan las organizaciones sindicales de trabajadores y las de defensores de los derechos humanos, protectoras del ambiente, de las comunidades y de los territorios de indígenas y afrocolombianos, etc.¹⁹

El eje de la confianza inversionista, ha servido para profundizar el modelo de apertura económica y liberalización comercial, generando garantías y desarrollos normativos favorables a la inversión extranjera directa. Esta estrategia ha sido acompañada por el establecimiento de un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales, como principal vía para lograr el crecimiento económico. La opción por la vía extractivista de recursos ha logrado la implantación de empresas multinacionales en los territorios nacionales, destacándose como ineludible actor de poder e influencia.

El modelo extractivista impulsado no sólo produce un enorme daño ambiental, sino que otorga una bajísima participación del Estado en las rentas y mantiene a la economía del país como un enclave de las potencias extranjeras, sin avanzar en medidas que permitan convertir los excedentes minero-energéticos en desarrollo y bienestar²⁰

El gobierno de Juan Manuel Santos ha supeditado el desarrollo del país a la explotación minero-energética mediante el pronunciamiento de una serie de normas que han asegurado los derechos del capital, tales como la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), y CONPES 3762 de 2013 (Proyecto de Interés Nacional y Estratégico). Estas políticas gubernamentales han consolidado un sector minero-energético entregado a las fuerzas del mercado, a la gran minería y sus gremios; que desconoce los mandatos de la Constitución Nacional y que ha favorecido la colonización de transnacionales canadienses, las cuales se mueven a través de prácticas especulativas y de corrupción, generando múltiples conflictos territoriales y ambientales.

A modo de ejemplo, conviene señalar que durante el año 2013 por ejemplo, la estatal Ecopetrol pagó 2,5 veces más impuestos que todas las compañías privadas de hidrocarburos y 10,5 más veces que todas las mineras. Asimismo, los dividendos e impuestos de Ecopetrol representan el 86% de los ingresos del Estado por estos conceptos, pagando 8,5 más veces que las petroleras privadas y 36 veces más que todas las mineras.

En materia del sector agrario, las políticas desarrolladas han contribuido a la consolidación hegemónica de las tradicionales elites terratenientes. El mandato de Santos no ha facilitado mecanismos de

¹⁹ Giraldo, Jaramillo, Juan Esteban: “*La producción de vidas residuales*”, en Ponencia presentada en el II Coloquio Usos y Lecturas de Foucault para la Agencia de Prensa, Octubre, 2016. <http://www.ipc.org.co>

²⁰ Rodríguez, Gina, Paola: “*Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿ una misma derecha*”, Revista Nueva Sociedad, N° 254, Noviembre-Diciembre, 2014, p. 93

inserción para el extenso colectivo de campesinos ni pequeños productores, en el proceso de desarrollo del país. Santos sigue sin concebir una política integral que resuelva problemas estructurales como la propiedad, la concentración de la tierra y el tipo de explotación. De lo que se trata es de la puesta en marcha de una política intensiva del capital rural, direccionada hacia el crecimiento económico y de la producción, por ende enfocada en aquellos sectores inversores que exhiben activos de calidad y en quienes han desarrollado capacidades empresariales para competir en los mercados internos y externos. En este sentido resulta bastante gráfico la designación de Aurelio Iragorri Valencia como ministro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que el mismo funcionario representa a la fracción más concentrada de la clase terrateniente colombiana, en tanto se ha desempeñado como Gerente Administrativo de Comercial Córdor de Colombia S.A. y director administrativo y financiero de Malterías de Colombia y Malterías S.A., dos de las más grandes empresas de los Santo Domingo (de notable trascendencia en el plano del negocio agroindustrial).²¹En contrapartida para el resto del sector, las políticas implementadas no han superado la proliferación de medidas asistencialistas y compensatorias, de escasa-por no decir nula- incidencia sobre los factores que impiden un mayor crecimiento e inserción de los más vulnerables e históricamente excluidos de los procesos de desarrollo.

En último lugar, el eje de la cohesión social planteó como propósito la erradicación de la pobreza y la desigualdad, mediante el pronunciamiento de una serie de políticas asistencialistas, las cuales no han logrado hasta el momento remover las causas estructurales de dichas problemáticas. Muy por el contrario, y en términos de integración, el modelo de desarrollo direccionado hacia el mercado desde las elites económicas colombianas, y su influencia sobre el aparato estatal, ha significado la continua consolidación del bloque dominante histórico del país. A pesar de lo paradójico que parezca, se sigue considerado que para la superación de problemas como la pobreza y la desigual distribución de los ingresos y la riqueza, se debe profundizar el modelo de desarrollo neoliberal, en busca de un crecimiento económico acelerado, que permita la generación de empleo dependiente, pero sobretodo de oportunidades de autoempleo. Todo esto articulado al proceso de inserción en el mercado global, para lo cual se requiere que las actividades económicas transables sean competitivas.

²¹ Lo mismo puede decirse del Viceministro Juan Pablo Granados Pinedo, quien fue director financiero de C.I. Tequendama, una empresa palmicultora del grupo empresarial Daabon de la familia Dávila Abondano (una de las grandes beneficiarias de Agro Ingreso Seguro). Ex gerente de la campaña de la reelección de Santos. El viceministerio al que llegó es el que se encarga de todos los temas que tienen que ver con la calidad de vida de los campesinos, como el manejo de tierras, la restitución, la vivienda rural, los distritos de riego o la educación. Es decir, el centro del acuerdo rural del proceso de paz.

Gabinete Presidencial hoy

En rasgos generales el gabinete histórico de Santos ha adquirido rasgos bastante heterogéneos y el actual en particular no es la excepción. Los funcionarios elegidos provienen de diversas universidades (públicas y privadas), diversas carreras y en general, mantienen una tendencia a identificarse bajo la línea de tecnócratas por encima de la de políticos. Así en el caso de los MDIE las carreras de grado hegemónicas son las de Derecho y Economía (con el 42,10% y el 36,85% respectivamente) seguidas muy por detrás por las de Ingeniería (10,55%), Relaciones Internacionales (5,25%) y Comunicación Social (5,25%).

En cuanto a lo que del tipo de establecimiento de formación se refiere, sea público o privado, la concentración es mayor en instituciones de carácter pagas (77,77%) por sobre aquellas de carácter público (22,22%).

En materia de participación política apenas un tercio de los funcionarios seleccionados en los MDIE presenta/tó una militancia activa en partidos políticos (33,33% por sobre un 66,66% que nunca participó), reconociendo mayor incidencia de los Partidos Liberal e Unidad Nacional por sobre el Partido Conservador. Sin embargo, las particularidades endebles del sistema político colombiano signado por, como afirma Alejo Vargas Velásquez(), un bipartidismo histórico - hasta la reforma de la Ley de Bancadas del 2003 que a partir de medidas como la lista única por partidos, el umbral, la cifra repartidora y la ley de bandas para frenar las emigraciones y favorecer la emergencia de nuevos partidos políticos - en el cual ha sido frecuente la figura del transfuguismo ²², nos impiden elaborar juicios tajantes acerca del carácter ideológico de cada estructura partidaria debido a la confluencia histórica de intereses semejantes. ²³

Entre los altos funcionarios que componen el MDIE hemos notado una marcada concurrencia de individuos que construyeron buena parte de sus trayectorias ocupacionales entre el desplazamiento (alternativo) de instituciones del sector público y organismos, foros u/o empresas del sector privado: un 61,11% presenta una trayectoria compartida público-privada (rasgo que comparten los 4 cabecillas ministeriales). En adición, un 22,22% presenta una trayectoria privada pura, en donde resalta la concurrencia laboral en entidades vinculadas con el ejercicio de funciones financieras (bancos, consultoras, holdings, juntas directivas de agencias de circulación de capitales); mientras que un

Vargas, Velásquez, Alejo: "El sistema político al inicio del gobierno de Santos en, Revista Nueva Sociedad, N° 231, Enero-Febrero, 2011, p. 126

²³ Ídem

16,66% solo construyó una trayectoria “pública pura” llevada a cabo exclusivamente en instituciones del aparato estatal.

Conclusión

A modo de cierre este trabajo encuentra más planteos e interrogantes de cara a futuras investigaciones, que certezas y resultados concluyentes. Ha sido nuestro objetivo establecer aquellos escenarios a partir de cuales las elites económicamente dominantes se hicieron/hacen de las rentas que emanan del Estado colombiano. En términos generales se ha hablado de las elites en tanto unidad homogénea compuesta en virtud de su poderío económico-político. Mediante la concentración de los instrumentos de poder, riqueza y celebridad- a la manera en que los caracteriza Wright Mills- las elites predominantes en el plano económico de la coyuntura colombiana se han hecho cargo en buena medida de las principales administraciones estatales y han direccionado sus “proyectos de país” a partir del monopolio mismo del estado. Monopolio que se expresa desde la captura misma de los principales puestos gubernamentales, la capacidad de adecuación de los marcos jurídicos en materia de políticas mineras, la designación de metas comunes que “engrandecerían” el desarrollo económico del país, pero que del otro lado de la moneda sólo contribuyen a reproducir la dinámica de generamiento de condiciones de desigualdad social tan características en la región. En suma creemos que un abordaje más íntegro del problema de las elites en Colombia, necesariamente debiera abordar ciertas cuestiones histórico-estructurales del país vinculadas a: 1) la opacidad de los procesos de formulación de proyectos de ley por parte del gobierno y tramitación por el legislativo; 2) el escaso uso de mecanismo de control ciudadano como las audiencias públicas; 3) la ausencia de mecanismos efectivos de petición y rendición de cuentas; 4) la debilidad orgánica de los partidos políticos como entes representativos y tramitadores de pertinencias ideológicas en la sociedad; y 5) la fragilidad y falta de representación de las agremiaciones. Creemos que dicho abanico de posibles ejes de análisis encuentra en el legado de la sociología histórica una roca sólida desde la cual aferrarse para seguir avanzando.

Bibliografía

- Ansaldi, Waldo y Giordano Verónica (2016), *La construcción del orden*, Ed Ariel, Buenos Aires, Argentina
- Caicedo, Daniel; y Anzola, Librado: “La hegemonía de la oligarquía financiero-terrateniente en Colombia”, *Revista Espacio Crítico* N° 7, Julio-Diciembre, 2007
- Castellani, Ana y Canelo Paula, Informe de Investigación Perfil sociológico de los miembros del gabinete inicial del presidente Mauricio Macri, N°1, Buenos Aires, Instituto de Altos Estudios Sociales; 2016.
- Dowbor, Ladislau: “El capitalismo cambió las reglas, la política cambió de lugar”, en *Revista Nueva Sociedad*, Octubre, 2016.
- Giraldo, Jaramillo, Juan Esteban: “La producción de vidas residuales”, en Ponencia presentada en el II Coloquio Usos y Lecturas de Foucault para la Agencia de Prensa, Octubre, 2016. <http://www.ipc.org.co>
- Luis Jorge Gray Salamanca, Eduardo Salcedo, Isaac de León-Beltrán, Bernardo Guerrero; *La Reconfiguración cooptada del Estado: Más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado*, Edición Fundación AVINA, 2009.
- Mosca, Gaetano: *Elementos de ciencia política*. Primera edición. Turín, 1.987.
- Puello-Socarrás, José Francisco: “Elites, Elitismo y Neolitismo”, *Revista Espacio Crítico* N°2, México, 2005
- Rodríguez, Gina, Paola: “Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿ una misma derecha, *Revista Nueva Sociedad*, N° 254, Noviembre-Diciembre, 2014
- Vargas, Velásquez, Alejo: “El sistema político al inicio del gobierno de Santos en, *Revista Nueva Sociedad*, N° 231, Enero-Febrero, 2011